

Justicia y al Juzgado de Distrito residente en esta ciudad, archívense las diligencias. El O. Lic. Rafael Treviño de la Garza, Magistrado del Tribunal de Circuito de Nuevo-Leon, Coahuila y Tamaulipas, en revision, así lo decretó, mandó y firmó, por ante mí: doy fé.—Firmado.—*Lic. Rafael Treviño y Garza*.—*T. Crescencio Pacheco*, secretario.

Es copia que certifico. Monterrey, Octubre 31 de 1872.—*T. Crescencio Pacheco*, secretario.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, por el Lic. D. Feliciano Sierra y Rosso, en representación de la Sra. doña Tomasa Alvarez, albacea de la testamentaria de su esposo D. Pedro Gonzalez de la Vega, contra los procedimientos del administrador de rentas de Cuautitlan, que usando de la facultad económico-coactiva, exige el pago de mil setenta y un pesos noventa centavos, que asegura debe dicha Sra. por contribuciones.

PEDIMENTO DEL O. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que ha visto el escrito presentado por el O. Lic. Feliciano Sierra y Rosso, en representación de la Sra. doña Tomasa Alvarez, albacea testamentaria del Lic. D. José María Gonzalez de la Vega, quejándose del procedimiento del O. administrador de rentas de Cuautitlan, que se dirige á cobrar con la facultad económico-coactiva á la hacienda de Jalitpa, la suma de mil setenta y un pesos noventa centavos, por contribuciones prediales sobre el capital de veintiseis mil seiscientos sesenta y seis pesos, sesenta y seis centavos, que reconoce la expresada finca á la Beneficencia de la ciudad de México, y con cuyo procedimiento viola las garantías individuales del art. 14 de la Constitucion Federal.

Fundado en este precepto constitu-

Tomo III.—Parte II.

cional, pide el amparo y proteccion de la Justicia de la Union, sosteniendo, que de obligarse á la Sra. Alvarez, al pago de la expresada cantidad, se le daría notoriamente un efecto retroactivo al decreto que abajo se cita, sancionado con posterioridad á las leyes hacendarias del Estado, expedidas desde el año de 1868, hasta antes del 27 de Abril de este año, fecha en que expidió la legislatura del Estado el decreto á que antes me refiero, por el cual se grava con la contribucion predial á los capitales de beneficencia situados en el Estado, y que se reconozcan á favor de otros Estados.

El efecto de la retroactividad lo funda en que, habiendo las leyes del Estado exceptuado á la Beneficencia del pago de toda contribucion predial, haya venido el decreto citado de 27 de Abril, á declarar que la excepcion de pago respecto de los capitales de Beneficencia, no están ni han estado comprendidos en las excepciones de las leyes publicadas en los años anteriores.

El recurso parece fundado, porque el que responde cree que en efecto hay retroactividad en los casos en que puede tener efecto el referido decreto de 27 de Abril, pues los censatarios de capitales de beneficencia á favor de otros Estados, que se hallan situadas las fincas en el territorio del Estado de México, han podido arreglar y consumir sus contratos en la inteligencia que la beneficencia estaba libre de todo pago predial; y cuya creencia procede de las mismas leyes hacendarias, las cuales no hicieron distincion de beneficencia del Estado y beneficencia de otros Estados.

Hay ademas en favor de los censatarios de la beneficencia, la ley general de 16 de Mayo de 1861, que exceptúa de todo pago de contribucion á la beneficencia, y antes que las leyes del Estado debe acatarse la general.

Por tales consideraciones que se ampliarán si fuere necesario, el que suscribe pide al Juzgado se sirva dar al juicio el trámite que corresponda, pues entiendo que procede el recurso de amparo en la queja del referido C. Lic. Feliciano Sierra y Rosso.

Toluca, Octubre 2 de 1872.—Ceballos.

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de México.—Toluca, Octubre 18 de 1872.—Visto este expediente sobre recurso de proteccion y amparo, promovido por el C. Lic. Feliciano Sierra y Rosso, en representacion de la Sra. Alvarez Doña Tomasa, albacea de la testamentaria de su esposo Lic. D. Pedro Gonzalez de la Vega, contra el procedimiento del ciudadano administrador de rentas de Cuautitlan, que le exige el pago de la cantidad de un mil setenta y un pesos, noventa centavos, que asegura deber por contribuciones causadas desde Enero de 1868 hasta Abril último, con apercibimiento de embargo y remate de bienes suficientes, para el caso de no pagar dentro de cinco dias, sirviéndole de fundamento el decreto de 17 de Abril del corriente año, con cuyo procedimiento y por los fundamentos que expresa el quejoso, viola aquel funcionario la garantía que concede el art. 14 de la Carta fundamental de la República. Visto el informe producido por el empleado de rentas de Cuautitlan, y visto por último, lo pedido por el Ministerio público, y teniendo en consideracion: 1º Que una ley general declaró que pertenecian á la nacion los bienes de beneficencia pública: 2º Que otra generalmente exceptúa del pago de contribuciones, sean del género que fuesen, á los establecimientos de beneficencia pública, á las fincas, capitales y cualesquiera otros bienes que le estén

afectos para su conservacion y mejora: 3º Que esto supuesto, solo el Congreso de la Union, y en su caso, por el uso de facultades extraordinarias, el Ejecutivo de la misma, tiene facultades para derogar, modificar y aclarar dicha ley, ora porque ella es general, ora porque se contrae á bienes que, perteneciendo á la nacion, no están bajo el dominio de un Estado, para que pueda legislar respecto de ellos, administrar y disponer algo, sino en la parte que lo permite una ley igualmente general: 4º Que el código civil de este Estado, en nada se ha referido ni podido referir, á las disposiciones legales del gobierno de la Union sino á las del mismo Estado, y que aun para esto prohíbe que surta efecto retroactivo, cualesquiera ley, reglamento ó otra disposicion, declarando: que si bien no lo surte la modificacion del estado y capacidad de las personas, ha de ser preciso, indispensable, que la modificacion de ninguna manera afecte la validez de actos anteriores á ella, porque tal y tan grande así es el respeto que merecen en todos los pueblos civilizados, los derechos perfectos legítimamente adquiridos con apoyo de una ley anterior, y es por esto que, con referencia á disposiciones declaratorias y aclaratorias, exige por una parte, que ellas no alteren la naturaleza y esencia del precepto que declaran ó aclaran y por la otra, que las sentencias ejecutoriadas y las transacciones concluidas antes de la aclaracion, se tengan por válidas á pesar de que sean contrarias á dichas disposiciones: 5º Que los distintivos que marcan de un modo indudable á la ley que tiene efecto retroactivo, son, el uno, que vuelva sobre lo pasado y lo made, y el otro, que esto lo verifique con perjuicio de las personas que son objeto de sus disposiciones: 6º Que los decretos del Estado de 11 de Enero de 1868 y 25 de Abril del mismo año y sus correlativos, exceptúan

del pago de todo impuesto los bienes de beneficencia pública: 7º Que esto supuesto, la ley de 27 de Abril último, que no ha podido ser aclaratoria, porque á todas luces son claras y terminantes las anteriores relativas, especialmente la de 22 de Mayo de 1871, tiene efecto retroactivo, toda vez que vuelve sobre lo pasado y lo muda lastimando derechos perfectos legítimamente adquiridos (no están ni han estado comprendidas en la excepcion, ó lo que es igual deben y han debido) contra el principio salvador y conservador de la vida, fortuna y honor de los ciudadanos, consignado en todos los códigos, en cuyo caso y supuesta la existencia del art. 14 de la Constitución general, vulnera una de las garantías otorgadas en la Constitución, por un congreso legítimo en el cual estuvieron representados todos los Estados: lo alegado por el personero de la Sra. Alvarez, y todo lo demas que verconvino: la Justicia federal en el Estado de México, con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que debe ampararse y desde luego ampara á la Sra. Doña Tomasa Alvarez, contra la providencia del administrador de rentas de Cuautitlan, que le exige el pago de mil setenta y un pesos, noventa centavos, que dice debe de contribuciones por el capital de veintiseis mil seiscientos sesenta y seis pesos, setenta y seis centavos, que reconoce á la beneficencia pública de México, y manda que se haga saber este fallo: que se remitan de él las copias de estilo á las redacciones de costumbre para su publicacion, y que se eleve este expediente á la Suprema Corte de Justicia. El C. Lic. Ramon Ortigoza, definitivamente juzgando en primera instancia, así lo sentenció y firmó. Doy fé.—*Ramon Ortigoza.*—*Francisco del Valle*, secretario.

El ciudadano secretario que suscribe, certifica: que la precedente copia es á la

letra de su original que obra en el juicio respectivo. Toluca, Octubre 22 de 1872.
Lic. Francisco del Valle, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 4 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, por el Lic. Feliciano Sierra y Rosso, en representacion de la Sra. Dª Tomasa Alvarez, albacea de la testamentaria de su esposo D. Pedro Gonzalez de la Vega, contra los procedimientos del administrador de rentas de Cuautitlan, que exige el pago de la cantidad de un mil setenta y un pesos, noventa centavos, que asegura deber por contribuciones causadas desde Enero de 1868 hasta Abril último, usando de la facultad económico-coactiva para hacer dicho cobro, y apoyando su resolucion en el decreto de 27 de Abril del presente año, expedido por la legislatura del Estado, creyendo el peticionario en la persona de su representada, violadas las garantías consignadas en el art. 14 del Pacto federal de la República. Vistas las constancias de autos y considerando: que por las leyes generales y las particulares del Estado fecha 11 de Enero y 25 de Abril del año de 1868, están exceptuados del pago de contribuciones, sean del género que fueren, los establecimientos de beneficencia pública, las fincas, capitales y cualesquiera otros bienes que le estén afectos para su conservacion y mejora, y que siendo el capital de que se trata, perteneciente á la beneficencia, segun consta de la escritura de reconocimiento, el decreto de 27 de Abril, aclaratorio de las citadas leyes, declarando que se deben pagar las contribuciones de 1868 hasta la fecha en que se solicitó el amparo, viola por su retroactividad las garantías aducidas por el peticiona-

rio en su escrito de queja; por tales fundamentos se decreta: Que es de confirmar y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Toluca, cuya parte resolutive dice: "La Justicia federal en el Estado de México, con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que debe amparar y desde luego ampara á la Sra. D^a Tomasa Alvarez, contra la providencia del ciudadano administrador de rentas de Cuautitlan, que le exige el pago de mil setenta y un pesos noventa centavos, que dice debe de contribuciones por el capital de veintiseis mil seiscientos setenta y seis pesos setenta centavos, que reconoce á la beneficencia pública de México."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*Pedro Ordaz*.—*Ignacio Ramírez*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Aza*.—*Simon Guzman*.—*Luis Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre 28 de 1872.—*Ldo. Agustín Peralta*, oficial mayor.

COMPETENCIA promovida por el Juzgado de Distrito de Guanajuato al 2º de México, sobre conocer del aseguramiento de las haciendas "El Mayonazgo," "San Cristóbal" y "San José," citas en Apaseo, jurisdicción de Celaya.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Fiscal dice: que el juez de Distri-

to de Guanajuato, á excitativa del Sr. Lic. D. Octaviano Muñoz Ledo, ha iniciado competencia al juez 2º del mismo fuero de esta capital, para conocer del juicio que el Promotor fiscal de México ha promovido contra la testamentaria de D. José Perez Arce, sobre cumplimiento de la cláusula 17ª del testamento otorgado por el finado, en virtud de la cual dejó un capital que segun la mente del testador debía invertirse en objetos de beneficencia.

A consecuencia de esta demanda el Promotor fiscal pidió, como acto previo al juicio, fueran aseguradas unas haciendas de que hoy es poseedor el Sr. Muñoz Ledo, ubicadas en jurisdicción de Celaya Estado de Guanajuato, y cuyas fincas como parte que fueron de la testamentaria de Arce, son responsables al pago de los gravámenes que sobre ellas impuso el testador. Siendo de advertir que esa diligencia de aseguramiento, y para cuya práctica fué necesario librar exhorto al juez de Celaya, no llegó á desahogarse, tanto porque el Juzgado requerido no creyó de su deber obsequiar un exhorto librado sin las formalidades de estilo, como tambien porque el juez requerente, accediendo á la petición de los Sres. Carresse y Muñoz Ledo, y con audiencia del Ministerio público, no creyó de necesidad insistir mas en la providencia.

En este estado y suspenso así el secuestro de las fincas, el juez de Distrito de Guanajuato como se ha dicho, inició competencia al 2º de México, para conocer de este litigio.

La razon legal en que esta segunda autoridad funda su jurisdicción, es que en esta capital y ante el expresado Juzgado 2º, está radicada la testamentaria de Perez Arce. Esta razon le parece tan decisiva, que se abstiene de alegar ninguna otra. El suscrito es de la misma opinion; mas aun puedo alegarse en